



## La “Trampa de Tucídides Institucional” un lujo suicida en el Ecuador

***Una alteración doctrinaria de alto riesgo en la guerra interna que se vive.***

General Oswaldo Moreno  
ASOCID – ECUADOR  
Quito, 19 de mayo de 2026



*Método Mental Sistémico by Osmov 5D, AAI*

**QUITO** — La propuesta de “dejar clara la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional” dentro del proyecto de ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional no es un simple ajuste terminológico. **Es una alteración doctrinaria de alto riesgo.** Según el informe legislativo para primer debate, esa observación fue presentada por un delegado técnico del Ministerio del Interior y elaborada en las mesas técnicas con la Policía Nacional y el propio Ministerio; concretamente, se recomendó sustituir la redacción del principio de sujeción al poder civil para dejar establecida esa subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, bajo mando supremo presidencial.

El problema no está en que la Policía Nacional solicite apoyo. Eso es constitucionalmente posible. El problema aparece cuando el apoyo complementario pretende convertirse en subordinación operativa general de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Allí deja de haber cooperación y empieza una confusión institucional.

La llamada “Trampa de Tucídides”, popularizada por Graham Allison, describe la tensión estructural que se produce cuando un poder ascendente amenaza con desplazar a un poder establecido; en su estudio histórico, el proyecto de Harvard identificó dieciséis casos de rivalidad entre poder emergente y poder dominante, de los cuales doce terminaron en guerra. Trasladada con cautela al caso ecuatoriano, la idea sirve como advertencia:

**cuando una institución intenta ampliar su espacio de mando sobre otra, no siempre fortalece al Estado; a veces activa una competencia de prestigio, mando y protagonismo que debilita la unidad de esfuerzo frente al verdadero enemigo.**

En Ecuador, esa trampa no debe producirse entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ambas instituciones pertenecen al mismo Estado, ambas están sometidas al poder civil, ambas son indispensables y ambas están obligadas a cooperar. Pero cooperar no significa subordinar institucionalmente. Coordinar no significa absorber. Apoyar no significa obedecer a la institución apoyada como si se tratara de una relación jerárquica permanente.

La Constitución distingue las misiones. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial; la Policía Nacional tiene la responsabilidad de la protección interna y el mantenimiento del orden público. **La reforma al artículo 158 habilitó el apoyo complementario y subsidiario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, en condiciones extraordinarias, reguladas, fiscalizadas y bajo control democrático;** no creó una relación de subordinación institucional de los militares al mando policial. El propio proyecto legislativo reconoce que la ley debe regular condiciones, procedimientos, límites, controles y responsabilidades del apoyo complementario

en los casos excepcionales previstos por la Constitución.

Por tanto, la pregunta correcta no es: ¿quién subordina a quién? La pregunta correcta es: qué misión se ejecuta, bajo qué régimen jurídico, con qué cadena de mando, por cuánto tiempo, con qué límites y bajo qué control constitucional y político.

En seguridad ciudadana ordinaria, la Policía Nacional lidera su misión natural. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar de forma complementaria, subsidiaria, temporal, proporcional y regulada. Pero ese apoyo no convierte a las Fuerzas Armadas en una Policía de mayor calibre ni autoriza a la Policía Nacional a ejercer mando institucional sobre capacidades militares.

En defensa, conflicto armado, grave conmoción interna o escenarios excepcionales previstos por la ley, la lógica cambia. **La Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo órgano de planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares.** Además, dispone que el Comando Conjunto planifica el empleo militar de la fuerza auxiliar. La misma ley señala que la Policía Nacional constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía e integridad territorial del país en estado de excepción, y que, decretado el estado de excepción por inminente agresión externa o grave conmoción interna, la fuerza auxiliar y los órganos de apoyo a la defensa se subordinan al Comando Conjunto, total o parcialmente.

Esto no significa militarizar permanentemente a la Policía. Tampoco significa desconocer la misión policial. Significa algo más preciso: cuando la misión es policial, hay coordinación y apoyo complementario; cuando la misión es militar o de defensa, el mando operacional corresponde a la estructura militar competente. Esa distinción no es caprichosa. Es arquitectura constitucional del Estado.

La jurisprudencia constitucional también exige precisión. La Corte Constitucional ha señalado que la existencia de un conflicto armado no internacional CANI es una cuestión fáctica: no depende necesariamente de que el presidente de la República lo declare, de que la Asamblea lo ratifique o de que la Corte emita un dictamen favorable. Si en los hechos concurren los requisitos de intensidad y organización, se activa el Derecho Internacional Humanitario junto con la Constitución, los derechos humanos y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La Corte también ha diferenciado el CANI como realidad fáctica del conflicto armado interno como causal para decretar un estado de excepción, precisamente porque un conflicto armado puede durar más allá de los límites temporales del régimen excepcional.

Esa doctrina impide dos errores. Primero, negar que en ciertos escenarios el empleo militar pueda ser necesario aun fuera de una lógica policial ordinaria. Segundo, creer que toda situación de inseguridad habilita automáticamente medidas excepcionales o subordinaciones no previstas por la ley. La legalidad no se improvisa en caliente; se diseña con precisión para que la fuerza pública actúe sin romper al Estado que pretende defender.

Aquí aparece la verdadera “**Trampa de Tucídides institucional**”: mientras el Estado enfrenta organizaciones criminales transnacionales, **las instituciones públicas pueden caer en una pugna secundaria por mando, visibilidad y protagonismo.** Esa pugna desplaza la atención del enemigo real hacia una competencia interna. Y cuando la competencia interna sustituye a la unidad de esfuerzo, el beneficiario no es la ciudadanía, ni la Policía, ni las Fuerzas Armadas. **El beneficiario es el crimen organizado.**

El Ecuador no necesita una Policía subordinando a las Fuerzas Armadas ni unas Fuerzas Armadas sustituyendo a la Policía. Necesita de una conducción política superior, claridad jurídica, interoperabilidad, inteligencia compartida, mando operacional

delimitado, reglas de uso de la fuerza, control democrático y respeto a las misiones diferenciadas. **Necesita de una plena comprensión de que la estrategia militar de la conducción de la guerra es estudiada y bien entendida por los militares, no por policías, ya que esa NO es su misión fundamental.**

La redacción legislativa debería ser clara: toda actuación de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional se realiza bajo el mando supremo del presidente de la República, con coordinación interinstitucional entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ningún caso el apoyo complementario podrá interpretarse como subordinación institucional, orgánica o permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y en los supuestos previstos por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la fuerza auxiliar se sujetará al régimen de subordinación operativa excepcional al Comando Conjunto, total o parcialmente.

Esa fórmula preserva la Constitución, evita la competencia institucional y protege la eficacia operativa.

La seguridad del Estado no se fortalece confundiendo misiones. Se fortalece ordenando competencias.

**La Policía Nacional no debe aspirar a convertirse en mando militar. Las Fuerzas Armadas no deben convertirse en Policía ordinaria. Y el poder civil no debe permitir que una ley nacida para coordinar termine sembrando rivalidad entre dos instituciones que deben combatir juntas.**

**En la guerra del Estado contra el crimen organizado, caer en la “Trampa de Tucídides institucional” sería un lujo suicida.**

El Ecuador no necesita una Atenas policial ni una Esparta militar.

Necesita de una República unida, de una conducción política coherente y de una doctrina clara.

### **Nota metodológica**

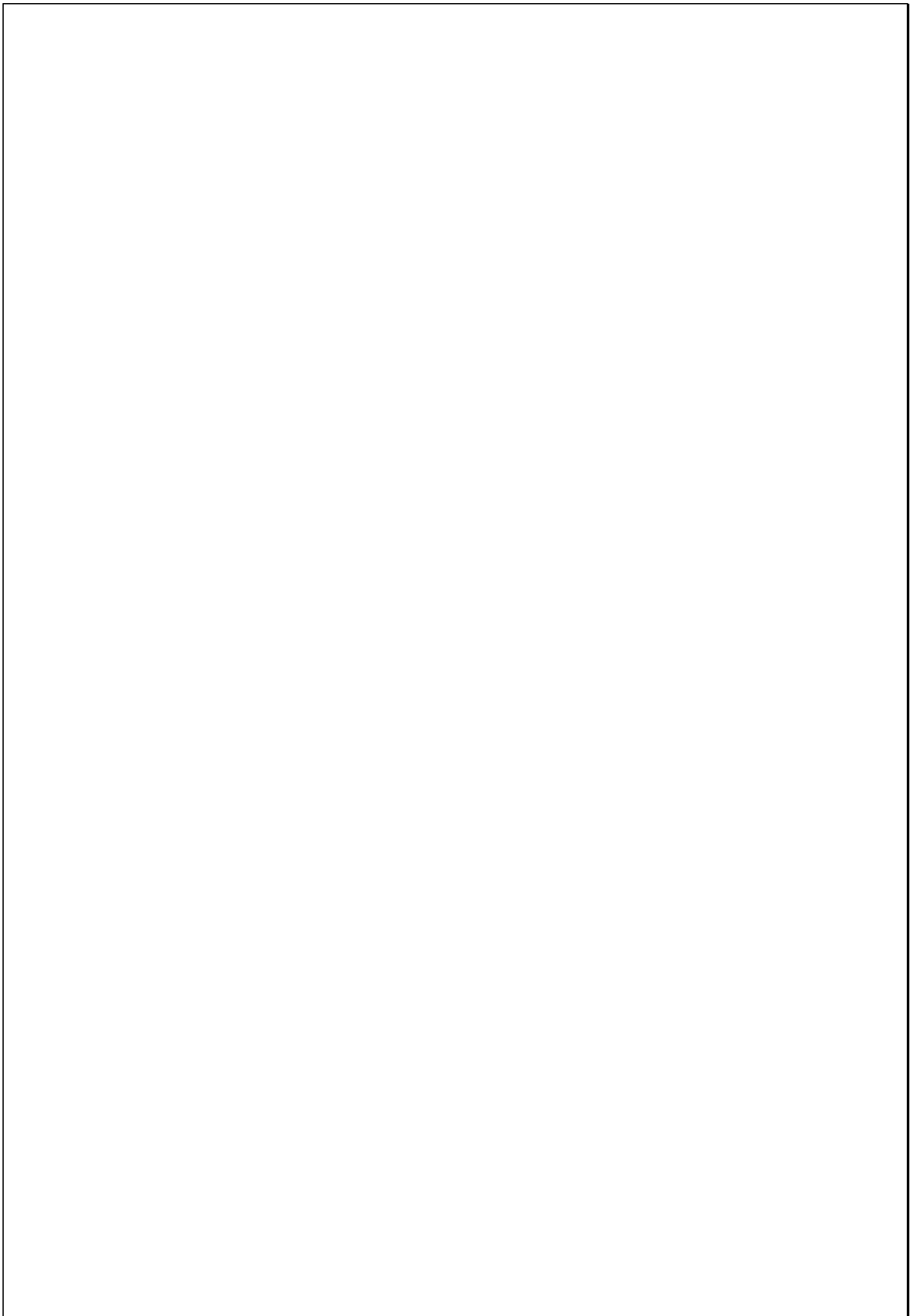
La referencia a la “Trampa de Tucídides” se emplea en este artículo como una analogía institucional y doctrinaria, no como una traslación mecánica de una teoría de rivalidad interestatal. Su utilidad consiste en advertir el riesgo de competencia por mando, prestigio o protagonismo entre instituciones estatales que deberían actuar bajo unidad de esfuerzo frente a una amenaza común.

---

### **Referencias:**

- **Constitución de la República del Ecuador.** Artículos 158 y 159. Misiones diferenciadas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sujeción al poder civil y a la Constitución.
- **Asamblea Nacional del Ecuador.** *Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución.* El informe recoge la observación del delegado técnico del Ministerio del Interior sobre “dejar clara la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional”.
- **Asamblea Nacional del Ecuador.** *Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.* El objeto del proyecto es regular condiciones, procedimientos, límites, controles y responsabilidades del apoyo complementario y subsidiario en los casos excepcionales previstos en el artículo 158.
- **Ley Orgánica de la Defensa Nacional del Ecuador.** Define las misiones de los órganos de defensa nacional, la organización del sistema de defensa y las relaciones de mando y subordinación de sus componentes.

- **Corte Constitucional del Ecuador.** *Dictamen 1-24-EE/24.* Diferencia entre el CANI como cuestión fáctica y el conflicto armado interno como causal para la declaratoria de estado de excepción.
- **Corte Constitucional del Ecuador.** *Dictamen 2-24-EE/24.* Ratifica el análisis constitucional sobre el estado de excepción, la renovación del régimen excepcional y la relación con el conflicto armado interno.
- **Comité Internacional de la Cruz Roja.** *Cuál es la definición de “conflicto armado” según el Derecho Internacional Humanitario.* El CICR señala que los conflictos armados no internacionales requieren un nivel mínimo de intensidad y una organización mínima de las partes.
- **Allison, Graham.** *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?* Harvard Kennedy School. Fuente base para explicar la Trampa de Tucídides como tensión estructural entre poder ascendente y poder establecido.
- **Harvard Kennedy School – Belfer Center.** *Thucydides’s Trap Case File.* El proyecto identifica dieciséis casos históricos de rivalidad entre poder ascendente y poder dominante; doce terminaron en guerra.
- **International Committee of the Red Cross.** *How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law?* Fuente técnica en inglés sobre la clasificación de conflictos armados y criterios de intensidad y organización en NIAC/CANI.
- **Hanania, Richard.** *Graham Allison and the Thucydides Trap Myth.* Strategic Studies Quarterly. Fuente crítica útil para reconocer que la Trampa de Tucídides debe usarse con cautela metodológica, especialmente cuando se aplica por analogía a un caso institucional interno.



## The “Institutional Thucydides Trap”: A Suicidal Luxury in Ecuador

*A high-risk doctrinal alteration in the internal war currently being experienced.*

General Oswaldo Moreno  
ASOCID – ECUADOR  
Quito, May 19, 2026



*Systemic Mental Method by Osmov 5D, AAI*

**QUITO** — The proposal to “make clear the subordination of the Armed Forces to the National Police” within the draft law that regulates the complementary and subsidiary support of the Armed Forces to the National Police is not a simple terminological adjustment. **It is a high-risk doctrinal alteration.** According to the legislative report for the first debate, that observation was presented by a technical delegate of the Ministry of the Interior and prepared in the technical working groups with the National Police and the Ministry itself; specifically, it was recommended to replace the wording of the principle of subjection to civilian authority in order to establish that subordination of the Armed Forces to the National Police, under supreme presidential command.

The problem is not that the National Police requests support. That is constitutionally possible. The problem arises when complementary support seeks to become the general operational subordination of the Armed Forces to the National Police. At that point, cooperation ceases to exist and institutional confusion begins.

The so-called “Thucydides Trap,” popularized by Graham Allison, describes the structural tension that occurs when a rising power threatens to displace an established power; in its historical study, the Harvard project identified sixteen cases of rivalry between a rising power and a dominant power, twelve of which ended in war. Transferred cautiously to the Ecuadorian case, the idea serves as a

warning: **when an institution attempts to expand its sphere of command over another, it does not always strengthen the State; at times, it activates a competition for prestige, command, and prominence that weakens unity of effort against the true enemy.**

In Ecuador, that trap must not arise between the National Police and the Armed Forces. Both institutions belong to the same State, both are subject to civilian authority, both are indispensable, and both are obliged to cooperate. But cooperation does not mean institutional subordination. Coordination does not mean absorption. Support does not mean obeying the supported institution as if it were a permanent hierarchical relationship.

The Constitution distinguishes the missions. The Armed Forces have as their fundamental mission the defense of sovereignty and territorial integrity; the National Police is responsible for internal protection and the maintenance of public order. **The reform to Article 158 enabled the complementary and subsidiary support of the Armed Forces to the National Police, under extraordinary, regulated, supervised conditions and under democratic control;** it did not create a relationship of institutional subordination of the military to police command. The draft legislation itself recognizes that the law must regulate the conditions, procedures, limits, controls, and responsibilities of complementary support in the exceptional cases provided for by the Constitution.

Therefore, the correct question is not: who subordinates whom? The correct question is: what mission is being carried out, under what legal regime, with what chain of command, for how long, with what limits, and under what constitutional and political control.

In ordinary citizen security, the National Police leads its natural mission. The Armed Forces may provide support in a complementary, subsidiary, temporary, proportional, and regulated manner. But that support does not turn the Armed Forces into a higher-caliber Police force, nor does it authorize the National Police to exercise institutional command over military capabilities.

In defense, armed conflict, serious internal disturbance, or exceptional scenarios provided for by law, the logic changes. **The Organic Law of National Defense establishes that the Joint Command of the Armed Forces is the highest body for the planning, preparation, and strategic conduct of military operations.** In addition, it provides that the Joint Command plans the military employment of the auxiliary force. The same law states that the National Police constitutes an auxiliary force of the Armed Forces for the defense of the country's sovereignty and territorial integrity in a state of exception, and that, once a state of exception has been decreed due to imminent external aggression or serious internal disturbance, the auxiliary force and the defense support bodies are subordinated to the Joint Command, totally or partially.

This does not mean permanently militarizing the Police. Nor does it mean disregarding the police mission. It means something more precise: when the mission is police-related, there is coordination and complementary support; when the mission is military or defense-related, operational command corresponds to the competent military structure. That distinction is not arbitrary. It is the constitutional architecture of the State.

Constitutional jurisprudence also requires precision. The Constitutional Court has stated

that the existence of a non-international armed conflict (NIAC) is a factual matter: it does not necessarily depend on the President of the Republic declaring it, the Assembly ratifying it, or the Court issuing a favorable opinion. If the requirements of intensity and organization are present in the facts, International Humanitarian Law is activated together with the Constitution, human rights, and the Ecuadorian legal order. The Court has also differentiated the NIAC as a factual reality from the internal armed conflict as a constitutional ground for declaring a state of exception, precisely because an armed conflict may last beyond the temporal limits of the exceptional regime.

That doctrine prevents two errors. First, denying that in certain scenarios military employment may be necessary even outside an ordinary police logic. Second, believing that every situation of insecurity automatically enables exceptional measures or subordinations not provided for by law. Legality is not improvised in the heat of the moment; it is designed with precision so that the public force acts without breaking the State it intends to defend.

Here appears the true **“Institutional Thucydides Trap”**: while the State faces transnational criminal organizations, **public institutions may fall into a secondary struggle for command, visibility, and prominence.** That struggle shifts attention away from the real enemy toward internal competition. And when internal competition replaces unity of effort, the beneficiary is not the citizenry, nor the Police, nor the Armed Forces. **The beneficiary is organized crime.**

Ecuador does not need a Police force subordinating the Armed Forces nor Armed Forces replacing the Police. It needs superior political leadership, legal clarity, interoperability, shared intelligence, delimited operational command, rules on the use of force, democratic control, and respect for the differentiated missions. **It requires a clear understanding that the military strategy for the conduct of war is**

**studied, mastered, and properly applied by military professionals, not by police forces, since the conduct of war is not their fundamental mission.**

The legislative wording should be clear: every action by the Armed Forces in support of the National Police is carried out under the supreme command of the President of the Republic, with interinstitutional coordination among the Ministry of the Interior, the Ministry of Defense, the National Police, and the Joint Command of the Armed Forces. In no case may complementary support be interpreted as institutional, organic, or permanent subordination of the Armed Forces to the National Police. And in the cases provided for by the Organic Law of National Defense, the auxiliary force shall be subject to the regime of exceptional operational subordination to the Joint Command, totally or partially.

That formula preserves the Constitution, avoids institutional competition, and protects operational effectiveness.

The security of the State is not strengthened by confusing missions. It is strengthened by ordering competencies.

**The National Police must not aspire to become a military command. The Armed Forces must not become ordinary Police. And civilian authority must not allow a law born to coordinate to end up sowing rivalry between two institutions that must fight together.**

**In the State's war against organized crime, falling into the "Institutional Thucydides Trap" would be a suicidal luxury.**

Ecuador does not need a police Athens nor a military Sparta.

It needs a united Republic, coherent political leadership, and clear doctrine.

#### **Methodological Note:**

The reference to the "Thucydides Trap" is used in this article as an institutional and doctrinal analogy, not as a mechanical transfer of a theory of interstate rivalry. Its

usefulness consists in warning of the risk of competition for command, prestige, or prominence among State institutions that should act under unity of effort against a common threat.

---

#### **References:**

- **Constitution of the Republic of Ecuador.** Articles 158 and 159. Differentiated missions of the Armed Forces and the National Police; subjection to civilian authority and to the Constitution.
- **National Assembly of Ecuador.** Report for the first debate of the Draft Organic Law regulating the complementary and subsidiary support of the Armed Forces to the National Police, in accordance with Article 158 of the Constitution. The report records the observation of the technical delegate of the Ministry of the Interior regarding "making clear the subordination of the Armed Forces to the National Police."
- **National Assembly of Ecuador.** Draft Organic Law regulating the complementary and subsidiary support of the Armed Forces to the National Police. The purpose of the draft law is to regulate the conditions, procedures, limits, controls, and responsibilities of complementary and subsidiary support in the exceptional cases provided for in Article 158.
- **Organic Law of National Defense of Ecuador.** Defines the missions of the national defense bodies, the organization of the defense system, and the command and subordination relationships of its components.
- **Constitutional Court of Ecuador.** Opinion 1-24-EE/24. Distinguishes between NIAC as a factual matter and internal armed conflict as a ground for declaring a state of exception.
- **Constitutional Court of Ecuador.** Opinion 2-24-EE/24. Reaffirms the constitutional analysis regarding the state of exception, the renewal of the exceptional regime, and

the relationship with the internal armed conflict.

- **International Committee of the Red Cross.** What is the definition of “armed conflict” under International Humanitarian Law. The ICRC notes that non-international armed conflicts require a minimum level of intensity and a minimum organization of the parties.
- **Allison, Graham. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?** Harvard Kennedy School. Base source for explaining the Thucydides Trap as a structural tension between a rising power and an established power.
- **Harvard Kennedy School — Belfer Center. Thucydides’s Trap Case File.** The project identifies sixteen historical cases of rivalry between a rising power and a dominant power; twelve ended in war.
- **International Committee of the Red Cross.** How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law? Technical source in English on the classification of armed conflicts and the criteria of intensity and organization in NIAC/CANI.
- **Hanania, Richard. Graham Allison and the Thucydides Trap Myth.** Strategic Studies Quarterly. Critical source useful for recognizing that the Thucydides Trap must be used with methodological caution, especially when applied by analogy to an internal institutional case.

[osmov@hotmail.com](mailto:osmov@hotmail.com)